

La 4T en cuarentena: los muertos que no importan en México

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS*

La pandemia de covid-19 irrumpe en un escenario mundial preñado por la crisis capitalista, una secuela del quiebre de 2007-2008, y amplía la estela destructiva de capitales, trabajos, infraestructuras y formas de socialización, precisamente cuando las grandes potencias estaban enfrascadas en una sorda guerra comercial, los capitales entregados al órdago especulativo y los políticos alimentaban sus tramas de poder con variantes ideológicas neoliberales, populistas, nacionalistas y fascistas. En respuesta a la gran crisis se ofrecen soluciones de mercado y medidas de aislamiento, pero ante todo se implanta un nuevo arreglo espacio-temporal de acumulación montado en plataformas tecnológicas de la llamada industria 4.0 basada en grandes corporaciones digitales, industrias automatizadas y formas de trabajo precarizado. Ante esa complejidad capitalista, la calamitosa gestión del gobierno mexicano, que ha pasado del negacionismo a una política de contención suave, se ha desplazado por el mundo surrealista de la disputa por los «otros datos» para contrariar los hechos, el juego de sombras en la confrontación política y la minimización de los daños socioeconómicos. La prioridad es proteger el proyecto político del gobierno: ortodoxia macroeconómica, austeridad, militarismo, obras efectistas y asistencialismo. Como en sexenios anteriores, los resultados son fatales: la mortandad por la violencia criminal y la pandemia se ha catapultado, el trabajo se precariza y la pobreza se multiplica. Aunque la popularidad presidencial se sostiene, el espectro necrótico invade el cuerpo social.

La muerte parece ser una dura victoria del género sobre el individuo y contradecir la unidad de ambos; pero el individuo determinado es sólo un *ser genérico determinado* y, en cuanto tal, mortal.

Karl Marx, 1844

Necrocapitalismo y crisis humanitaria

* Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México

A nivel mundial se cierne una crisis humanitaria de enormes proporciones debido a la amenaza contra la vida de millones de personas, sobre todo de trabajadores expuestos a los contagios y a la comorbilidad derivada de la propagación de la pandemia de coronavirus asociada a condiciones de pobreza y degradación socioambiental,

lo cual engendra una verdadera sindemia.¹ Pero también por los ajustes draconianos del capitalismo sobre el ámbito del trabajo, la depuración de capital y el relanzamiento de espacios de

¹ Merrill Singer, «A dose of drugs, a touch of violence, a case of AIDS: conceptualizing the sava syndemic», *Gangs, Drugs & Violence*, vol. 24, núm. 2, 1996; Richard Horton, «Offline: covid-19 is not a pandemic», *The Lancet*, vol. 396, 2020.

valorización. La incapacidad de los Estados para afrontar la crisis de salud pública y el simple recurso a buscar la salida de emergencia al adoptar soluciones de mercado (compra de vacunas a las grandes farmacéuticas sin restaurar sus sistemas sanitarios e invertir en investigación y desarrollo, I+D), reforzado con medidas de aislamiento y restricciones a las libertades humanas, se conjuga con la fuga hacia adelante del capitalismo que se monta en plataformas tecnológicas para adelantar la égida de la llamada industria 4.0 y sus capacidad inexorable de destruir capital, trabajo, infraestructura y formas de sociabilidad, a fin de dar paso a un nuevo arreglo espacio-temporal de acumulación basada en grandes corporaciones digitales, automatizadas, donde la precarización global del trabajo es la norma.²

La pandemia de la covid-19 es un fenómeno mundial, consustancial a la globalización del capitalismo, y es parte de la crisis que el propio sistema ha venido experimentando, al menos desde 2007-2008, de la cual no se ha repuesto. Uno de los rasgos característicos es que su centro gravitacional ha estado en los países que fungen como motores del desarrollo a escala global: según los organismos internacionales se habría gestado en China y el lugar con mayor afectación ha sido, al final de cuentas, Estados Unidos, sin desconocer el hecho de que se ha esparcido a todos los países, con mayores o menores niveles de intensidad.

México, ubicado como un país subordinado a la trama de acumulación regional de América del Norte comandada por Estados Unidos,³ aparece en escena como uno de los países más abatidos por la pandemia: en el tablero mundial figura como el cuarto lugar por mayor tasa de muertes con 2.06 por cada mil habitantes y el segundo lugar por el total de muertes con más de 262 mil decesos para abril de 2021, según cifras oficiales. Estos datos consideran el hecho de exceso de mortalidad, el indicador más confiable para estimar el impacto de la pandemia.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a partir de los registros administrativos que recopila, de enero a agosto de 2020 el exceso de morta-

lidad fue de 184 mil 917 personas, un dato que supone una sobremortandad por encima de la esperada a partir de la tendencia derivada de las muertes en los años previos.⁴ El exceso de muertes puede develar una política perversa de gestión de la muerte si se propicia o induce una depuración de la sobrepoblación relativa, del exceso de personas improductivas que no tienen cabida en el mercado laboral y que pueden significar una carga para el Estado como demandantes asiduos de atención hospitalaria, medicamentos y ayuda alimentaria.

En el exceso de mortalidad reportado se puede considerar que 109 mil defunciones se atribuyen a la covid-19; esto significa que por cada una de las muertes que las autoridades informan, estadísticamente habría 1.45 muertes por covid-19 o atribuidas a la pandemia, pero no reconocidas como tales, por lo que también deberían ser parte de la responsabilidad gubernamental. Debido al precario estado de la salud pública, en el exceso de muertes también se registra un incremento de 39% por enfermedades del corazón, 36% por diabetes y 44% por neumonía o influenza. En total, el exceso de muertes asciende a 370 mil, una cifra que sigue en constante aumento.

Austeridad letal

La política de austeridad es una prescripción eminentemente neoliberal, pues significa un recorte al gasto social y una reorientación del gasto gubernamental hacia las tareas de seguridad, administración y tributación al capital financiero. Importa más mantener el superávit fiscal, soportar una carga tributaria regresiva y preservar la estabilidad macroeconómica. En tanto se conculcan los derechos sociales y laborales, pese a que se compensen con programas asistencialistas y clientelares. En última instancia, se trata de una agenda conservadora y regresiva.

La reforma del Estado ensayada entraña la supresión de instituciones intermediarias entre el gobierno y la ciudadanía, la clausura o debilitamiento de entidades autónomas y regulatorias, el recorte del empleo, el ajuste al presupuesto y la reorientación a partidas preferenciales observando el superávit primario y las medidas ortodoxas de austeridad.

La crisis humanitaria puede ser definida como la incapacidad del Estado para garantizar la vida de la población

² Humberto Márquez Covarrubias, «Cuando la muerte tiene permiso: privatización de la salud pública y fuga hacia adelante en la economía mundial», *Observatorio del Desarrollo*, vol. 9, núm. 25, 2020.

³ Según los datos más recientes, México tiene una población de 126 millones 14 mil 24 habitantes (INEGI) y se ubica como el décimo país más poblado del planeta, un nivel que está en sintonía con el tamaño de su economía, por lo que se considera la onceava economía del mundo, no obstante, ser un país subdesarrollado.

⁴ INEGI, «Características de las defunciones registradas en México durante enero a agosto de 2020», Comunicado de prensa núm. 61/21, 27 de enero de 2021, en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf



A la salud pública se le destina alrededor de 2.5% del PIB, cuando se recomienda (según los parámetros internacionales) superar el umbral de 6%. Países desarrollados muestran otros indicadores: en Estados Unidos se invierte 14.3% y en Alemania 9.9%.

en la declarada emergencia pandémica que ha desencadenado una espiral de muerte asociada al coronavirus y otras morbilidades, como las enfermedades crónicas y degenerativas, pero también hay que agregar los homicidios dolosos derivados de las violencias de Estado y de la criminalidad. Esa incapacidad estatal se metamorfosea en una política necrófila, en la que en lugar de prevenir, atender y dar seguimiento a las enfermedades y los riesgos latentes de muertes violentas y sanitarias, se administra la mortandad de la población como un fenómeno inexorable, cuyo recuento se reporta cotidianamente en comunicados y gráficas donde la vida y la muerte son abstracciones estadísticas.

En tiempos de pandemia, la gestión estatal deviene una incapacidad cínica que renuncia a la función de solventar el derecho a la salud y de garantizar la sobrevivencia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha expresado que «nuestra estrategia fue desde el principio que a nadie le faltara una cama»; sin embargo, una política preventiva responsable e integral hubiera sido procurar que nadie necesitara una cama, con todo lo que ello significa, pero dado el desbordamiento de la emergencia sanitaria la situación no puede ser contrarrestada con la mera disposición camas sino con la habilitación de camas con equipamiento integral de cuidados

intensivos, personal médico capacitados e insumos hospitalarios suficientes. La mayoría de los enfermos que logran ingresar a los hospitales ya están en una condición crítica, resienten las condiciones austeras de los hospitales y luego de ser intubados tienen altas probabilidades de fallecer.

Al hacer un símil con el entorno hospitalario, puede asumirse que el sector salud mexicano está en zona de terapia intensiva y la pandemia vino a agudizar su estado catatónico, con una muy débil capacidad de respuesta y un deterioro acelerado de su capacidad operativa. Desde el punto de vista de la oferta, los gobiernos anteriores, y el presente, apegados a la agenda neoliberal de austeridad, han desinvertido en el sector y en consecuencia el sistema de salud pública se ha deteriorado aceleradamente.

El gasto público es determinante para la configuración de los servicios sanitarios de calidad. No obstante, a la salud pública se le destina alrededor de 2.5% del producto interno bruto (PIB), cuando se recomienda, según los parámetros internacionales, superar el umbral de 6%. Los países desarrollados, que suelen ser referentes en todas las materias, muestran otros indicadores, por ejemplo, en Estados Unidos se invierte 14.3% y en Alemania 9.9%.

En México, la población ha mostrado una tendencia demográfica creciente. En la última

década se han sumado casi 13 millones de habitantes para alcanzar un total de 127 millones; sin embargo, el gasto en salud se ha contraído, mientras que los gobiernos neoliberales lo redujeron a 2.8% del PIB, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), que se dice anti-neoliberal, lo redujo aún más, hasta situarlo en 2.5% del PIB.⁵

Muy dado a la retórica voluntarista, el gobierno de la 4T había propuesto instaurar en el país, a estas alturas, un servicio de salud universal, semejante al de Dinamarca —donde el gobierno destina 8.4% del PIB para 2019 en su sistema de salud—, pero la realidad es diametralmente opuesta. No sólo se ha desinvertido en el sector de salud pública, sino que dentro del gasto asignado se incurre deliberadamente en subejercicios, los cuales son presentados como «ahorros», y se incurrió en esta práctica regresiva aun durante los estragos de la pandemia. En ese periodo, el sector de salud pública se ha caracterizado por la saturación, falta de equipamiento, sobrecarga de trabajadores y desabasto de medicamentos. No sólo el nivel de gasto público en salud es de por sí bajo según los estándares internacionales y de acuerdo con las estimaciones epidemiológicas y demográficas, sino que resulta iluso suponer que abonará a una transformación social y a convertir al país en un Estado social, similar al danés.

El sector salud, como muchos otros, ha estado expuesto a la tecnocracia neoliberal, orquestada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ordena el recorte de personal, la generación de ahorros y el rediseño institucional para dar cabida a los nuevos funcionarios. El ahorro y el escrupuloso control del gasto en salud arroja costos humanos y los más afectados son los pobres.⁶ En lugar de apegarse a un criterio de solidaridad social, con contribuciones de trabajadores y empresarios, para expandir la salud pública como un derecho universal, gratuito y de calidad, la 4T se apega a la norma ortodoxa neoliberal de austeridad, sin importar las consecuencias.

El gobierno ordenó un recorte draconiano de 75% al gasto corriente, que compromete el funcionamiento de diversas áreas del gobierno, pero particularmente de áreas sensibles como salud (específicamente IMSS e ISSSTE) y educación; en contraste se ampliaron los recursos para las Fuerzas Armadas (el principal pilar político-económico del gobierno) y se reorientaron caudalosos recursos para las obras insignia (los megaproyectos de infraestructura en el sur-sureste, el aeropuerto capitalino, los programas de asistencia y el rescate a Pemex).

En contravención a su discurso social, el gobierno minimiza el drama social que significa la pandemia y continúa su adicción a la

cicatería neoliberal. Cerró el año fiscal 2020 con un subejercicio del gasto en el sector salud de 4.5% del presupuesto, esto es, bajo la premisa de optar por los «ahorros» dejó de ejercer 37 mil 19 millones 400 mil pesos de los 957 mil 156 millones 100 pesos asignados, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.⁷

La fórmula es bajar el gasto corriente e incrementar inversión pública selectiva o, más precisamente, por una parte, recortar la inversión en medios de consumo colectivo (salud y educación), en medios de producción colectivos (infraestructura productiva), en innovación y desarrollo (ciencia y tecnología) y, por otra parte, apuntalar los megaproyectos con orientación geopolítica para abastecer de materias primas y trabajo barato a las redes de capital global.

Desde comienzos del gobierno de la 4T el personal médico ha protestado por los recortes presupuestales, que han derivado en problemas como la falta de pagos a médicos residentes; la carencia de recursos para garantizar la atención médica a embarazos de alto riesgo, las citologías, la prevención de padecimientos infecto-contagiosos y enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión; la desatención a zonas de alta marginación por la insolvencia para adquirir insumos, medicamentos y material de curación; la desaparición del programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, pese a disponer de presupuesto. Sin mencionar el inconcluso tránsito del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el remplazo del sistema de compras consolidado de medicamentos en aras de un programa anticorrupción, que ha derivado en desatención de enfermos y

⁵ El presupuesto sanitario se divide en siete subsistemas con grados de desarrollo muy desigual: Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Salud (SSA) e IMSS Bienestar.

⁶ David Stuckler y Sanjay Basu, *Por qué la austeridad mata. El costo humano de las políticas de recorte*, México, Taurus, 2013.

⁷ El IMSS fue el organismo con el mayor subejercicio presupuestal: 25 mil 489 millones 300 mil pesos. No obstante, su director, Zoé Robledo, ha sido comisionado, en el contexto de la pandemia, para organizar 12 conmemoraciones en 2021 sobre la «Independencia y la Grandeza de México», para exaltar la ideología nacionalista del presidente (Gobierno de México, 1 de octubre de 2020, «Presentan 12 conmemoraciones emblemáticas en 2021, año de la Independencia y Grandeza de México», en <http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202009/661>). Este mismo funcionario, en otro momento exhortó a no realizar festejos de Navidad y Año Nuevo.

desabasto de medicamentos. Los recortes han redundado en la falta de medicamentos en cuando menos 24 estados del país, para el tratamientos de enfermedades como el VIH y el cáncer. Además, por el hecho de que las cuatro principales farmacéuticas nacionales estaban impedidas para participar en licitaciones por supuestos hechos de corrupción, y para ordenar y sanear el sector se nombró a David León como director de la empresa encargada de distribución, abasto de medicamentos, vacunas y equipo médico.

Paradójicamente, el funcionario no lograría asumir el cargo debido al videoescándalo donde se aprecia que él está entregando dinero en efectivo al hermano del presidente, cuando presumiblemente era funcionario del gobierno de Chiapas, en un tema de presunta corrupción no aclarado por el gobierno.

Desde el punto de vista de la demanda de servicios sanitarios, hay un gran déficit gubernamental, que significa una exclusión social y una precarización real de los servicios de salud pública. En México, 32.9 millones de mexicanos, es decir, 26%, no tienen afiliación a ningún servicio de salud; sólo 2.8% tiene acceso a la salud privada. En el IMSS está 51% de los inscritos; 35% en el Insabi. No obstante, la afiliación sólo es un dato administrativo que no refleja el acceso real a los servicios de salud, que por lo común suelen estar saturados y para efectos prácticos los pacientes son programados para su atención en fechas muy posteriores, amén de que priva el desabasto de medicamentos y, a final de cuentas, una franja importante de derechohabientes tiene que recurrir a consultorios u hospitales privados, cuyos altos precios repercuten en endeudamiento o pérdida patrimonial para los pacientes de las clases populares excluidos de la atención pública sanitaria, pero que indefectiblemente necesitan servicios hospitalarios especializados, los cuales nutren un fabuloso nicho de mercado.

En México, dada la insuficiente inversión gubernamental en salud pública, la carga del gasto se transfiere a las familias, por lo que son obligadas a afrontar las enfermedades recurriendo a los servicios privados. Inclusive, con un dejo de

sorna, el propio presidente mexicano ha dicho, reiteradamente, que «la mejor institución de seguridad social es la familia». No en balde México es el segundo país entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuyos ciudadanos realizan un mayor «gasto de bolsillo» (41%) para atender sus enfermedades.⁸ Más que un Estado social escandinavo, en el país persiste una degradación del sector público sanitario que obliga a las familias a realizar un gasto catastrófico y, en particular, para las familias pobres significa una pérdida patrimonial irreparable.

En definitiva, la austeridad y los recortes han cercenado al sector salud y los más afectados son los más pobres.

Costo humano

La pandemia desatada por la propagación de la covid-19 ha representado un gran costo humano para la población que ha sufrido la pérdida de vidas humanas, aunado al agravamiento de enfermedades preexistentes, pero también al incremento del desempleo y la pobreza debido a la cancelación de actividades productivas, la pérdida de ingresos y la caída del consumo, todo lo cual redundando en el exacerbamiento de la violencia y el incremento de enfermedades mentales asociadas. El cuadro patológico es diverso y la depresión económica severa.

En la cúspide de la necrosis social se ubican las muertes atribuidas al virus SARS-CoV-2. En primera instancia, éste es el principal indicador de la pandemia y de la gestión gubernamental en la emergencia sanitaria. Según diversos estudios, es claro que el gobierno y la sociedad mexicanos no salen bien librados: en términos gruesos, México se presenta en el mundo como el tercer país con el mayor número de muertos por covid-19, y en términos relativos el país se ubica en la segunda posición mundial por la tasa de fatalidad de 8.5% (muertes registradas/casos registrados).

El gobierno mexicano reportó que la primera muerte por covid-19 ocurrió el 18 de marzo de 2020. En aquel entonces se dijo que la pandemia no sería grave, pues era semejante a una gripe, y que un escenario «catastrófico» para el país sería si se alcanzara una cifra de muertes de 60 mil personas; sin embargo, para el 31 de agosto de ese mismo año ya se había superado ese umbral al registrar 64 mil 414 muertos, según los propios datos oficiales. Más aún, el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI registró otros datos para ese mismo día: 108 mil 658 muertos por covid-19, esto significa 75 mil 17 más de lo reportado por el Gobierno federal, que representa una diferencia de 44.8%. A un año de decretada la pandemia, los datos oficiales superan la barrera de los 200 mil muertos, pero los datos no oficiales, que pretenden des- enmascarar la cifra negra, son mucho mayores, puesto que duplican, inclusive triplican, esa cifra mortal.

⁸ OCDE, *Health at a Glance 2019*, 2019, en <https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-ES.pdf>

La razón de la brecha estadística es que el gobierno sólo reporta las muertes en hospitales, pero debido a la insuficiencia del sector salud, la mayoría de los enfermos por covid-19, además de otras enfermedades crónicas, como las que se ubican en el cuadro de principales causas de muerte (enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, influenza y neumonía, enfermedades del hígado, enfermedades cardiovasculares, homicidios, accidentes y enfermedades pulmonares), están muriendo sin la debida atención. Al respecto, un dato grave es que 58% de las defunciones habrían ocurrido fuera de las instalaciones hospitalarias: en las calles, en el transporte público o en las casas. Sin contar el hecho de que gran parte de los pacientes internados en los hospitales por covid-19 terminaron por fallecer. En aras de mantener el indicador de «disponibilidad de camas», se promovió la atención ambulatoria o se denegó la atención a enfermos con diversas afecciones, incluyendo las pandémicas. No cabe duda de que la pandemia de covid-19 desnudó el estado lamentable del sector salud.

El diferencial entre las muertes reportadas oficialmente y las calculadas por investigadores y analistas se deduce de los datos de las actas de defunción del Registro Civil. En tal sentido, los analistas expertos han establecido un factor multiplicador de 2.5 sobre las cuentas oficiales —algunos, inclusive, han propuesto un factor mayor de 3 y 3.5—, por lo que a estas alturas ya se habrían superado los 200 mil muertos, y la espiral ascendente no tiene reposo.

En los ocho meses reportados por INEGI (enero a agosto de 2020) murieron en el país 673 mil 260 personas, cuando se esperaba la muerte, según la tendencia, de sólo 488 mil 343, por lo que en el periodo se reporta un exceso de mortalidad de 184 mil 917, es decir, 37.9% más de lo esperado. Se trata de muertes atribuidas principalmente al influjo de la pandemia, y por derivación a los desaciertos en la estrategia epidemiológica.

A nivel nacional, en el cuadro de las principales causas de muerte, la hasta hace poco desconocida virosis de la covid-19 ya se ubica como la segunda causa de muerte entre enero-agosto de 2020 con 15.9%, sólo debajo de las muertes por enfermedades del corazón (20.8%) y por encima de la diabetes *mellitus* (14.6%).⁹ Este cuadro incluye a enfermedades mortales que son prevenibles, sin embargo la desatención programada al privilegiar el manejo de la covid-19 precipita el abandono de los enfermos, el aumento de los gastos catastróficos y el incremento de las muertes excesivas. Dada la complejidad sanitaria, resalta el hecho de que no se implementa una estrategia de atención conjunta a la diversidad de enfermedades.

⁹ INEGI, «Características de las defunciones registradas en México durante enero a agosto de 2020», Comunicado de prensa núm. 61/21, 27 de enero de 2021, en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf

Las clases sociales pobres son las que están más expuestas y propensas a contraer la enfermedad y, eventualmente, a fallecer.

Otros datos

La disputa por los datos es un frente más de confrontación política y mediática entre el gobierno, los organismos autónomos y los analistas independientes. En México, las fuentes gubernamentales reportaban 152 mil 16 muertes por covid-19 para el 26 de enero de 2021. Un dato que diariamente se está actualizando y que dibuja una espiral ascendente sin reposo. Sin embargo, a partir de los datos censales del INEGI y de las estimaciones independientes sobre el exceso de mortalidad, incluyendo los del propio gobierno, sale a colación que existe un subregistro de las muertes por covid-19, debido a que el gobierno federal sólo informa sobre las muertes contabilizadas en el sector salud (IMSS, ISSSTE y otros hospitales públicos), pero no registra los decesos en la vía pública o en las casas de los enfermos, los cuales son muy significativos debido a la política refractaria del sector público hospitalario a internar a los contagiados y enfermos para preservar artificialmente un indicador, el porcentaje de disponibilidad de camas, al cual le han conferido demasiado revuelo, como si fuera expresión de efectividad en el manejo de la pandemia.

Al respecto, se ha tomado el dato del exceso de mortalidad como una medida para determinar las otras muertes por covid-19 no reportadas oficialmente y para contrastarlo con los datos del gobierno, del INEGI y de los organismos internacionales. Diversos analistas que se basan en el factor de exceso de mortalidad para el periodo de la pandemia, a partir del saldo entre las muertes registradas en actas y la tendencia esperada de mortalidad y, arguyen que el gobierno está haciendo un subregistro de las muertes por covid-19 y que para llegar a la cifra real hay que multiplicarlo por 2.5.

En el marco internacional, México se ubica entre los países con peores indicadores por exceso de mortalidad. Entre los 20 países con más muertes, de un total de 79, para noviembre de 2020,

México se ubica en el segundo lugar mundial por muertes en exceso con 262 mil 905 (el primer lugar lo ocupa Estados Unidos con 471 mil 230); en la cuarta posición mundial con una tasa de 2.06 por cada mil habitantes (el primer lugar lo ocupa Perú, con 3.06, el segundo Ecuador, con 2.36, y Bolivia con 2.25); y la cuarta posición mundial con 39% de muertes en exceso (el primer lugar lo ocupa Perú, con 97%, el segundo Ecuador, con 61% y el tercero Bolivia con 54%).¹⁰ Debido a que los datos corresponden al mes de noviembre,¹¹ no consideran la oleada exponencial de contagios y muertes ocurrida entre diciembre y enero a consecuencia de haber desatendido el rebrote previsible, según advertían los expertos. Por lo demás, los efectos de la crisis socioeconómica siempre son desestimados.

El costo humano de la pandemia y de la gestión del Gobierno, si se consideran todos los decesos reales asociados, puede alcanzar la cifra de 200 mil muertos entre marzo de 2020 y enero de 2021, pero el pronóstico es reservado. Asimismo, las proyecciones son más que catastróficas, pues se advierte que puede llegarse a 300 mil muertos.

De acuerdo con un estudio patrocinado por la OMS, en México al menos 190 mil muertos en 2020 por el coronavirus pudieron evitarse, y ese saldo fatal se atribuye a la mala gestión gubernamental, pues daba señales contradictorias a la población mientras el sistema sanitario se colapsaba.¹² El gobierno mexicano ha admitido un exceso de 326 mil 609 muertes en 2020, por lo cual México se ubica en el tercer lugar mundial con más decesos, detrás de Estados Unidos y Brasil.¹³

¹⁰ Karlinsky y Kobak, «Tracking excess mortality across countries during the covid-19 pandemic with the World Mortality Dataset», *eLife*, 2021, en <https://doi.org/10.7554/eLife.69336>, https://github.com/akarlinsky/world_mortality

¹¹ Gobierno de México, «Exceso de mortalidad en México», 13 de septiembre de 2021, en <https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/>

¹² Mariano Sánchez, Eduardo González, Jaime Sepúlveda, Lucía Abascal, Jane Fieldhouse, Carlos del Río y Sarah Gallalee, *La respuesta de México al Covid-19: estudio de caso*, San Francisco, Institute for Global Health Sciences, UCSF, 2021, en https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf.edu/files/la_respuesta_de_mexico_al_Covid_esp.pdf

¹³ Sebastián Barragán, «México cerró 2020 con 326 mil muertes en exceso», *Aristegui Noticias*, 22 de febrero de 2021, en

Inusitadamente, en vez de experimentar dos olas en la trayectoria de la pandemia, México se quedó montado en una sola y larga ola con niveles muy altos de covid-19, un síntoma de la incapacidad para controlar la transmisión y mortandad.

A un año de la pandemia, la cifra real de muertos por covid-19, que considera tanto los datos oficiales del gobierno como la cifra negra, es decir, el exceso de mortalidad, estaría sobrepasando el medio millón de defunciones.

Con todo, la dimensión de la crisis humanitaria incluye, por una parte, a los muertos, enfermos y convalecientes, y, por otra parte, a los desempleados, los empobrecidos y las víctimas de la violencia.

Atención refractaria

Bajo la estratagema de esgrimir «otros datos» que eludan los problemas que la realidad le plantea a la 4T y en lugar de un indicador objetivo sobre el costo humano de la pandemia, el gobierno ha optado por un indicador frío y despersonalizado: la disponibilidad de camas hospitalarias, donde a mayor disponibilidad la gestión será más exitosa. Pero este indicador encierra una trampa, toda vez que los hospitales han adoptado una política refractaria a la recepción e internación de enfermos de covid-19 —máxime de otras enfermedades graves o crónicas—, además de que se ha incrementado la adquisición de camas y se ha implementado el tratamiento ambulatorio a pacientes infectados mediante la provisión de un kit de medicamentos (antiinflamatorios, antivirales, analgésicos, paracetamol, ibuprofeno y un desparasitante) y el tratamiento a distancia por teléfono. Esto tiene el doble efecto de incrementar artificialmente la disponibilidad de camas y de abultar la cifra negra de decesos fuera de instalaciones hospitalarias y, a la postre, no reportadas en las estadísticas oficiales, toda vez que se incrementa el fallecimiento extrahospitalario.

Por añadidura, en la estrategia de ampliación numérica de camas se omite el hecho de que no sólo se precisan camas disponibles sino de camas con equipamiento, medicamento y personal especializado en terapia intensiva y manejo de ventiladores, elementos colaterales que no se acompañan a las nuevas adquisiciones. En resumidas cuentas, los hospitales se han convertido en espacios cerrados, refractarios, que están negando la atención o lo hacen con criterios de selectividad a los enfermos de covid-19 y de enfermedades crónicas, no se diga de enfermedades leves o estacionales. La disponibilidad de camas representa la punta del iceberg.

Una afectación lacerante de la atención ambulatoria o del tratamiento de enfermos en casa es el desabasto de medicamentos y de oxígeno. Los familiares de los enfermos recorren una gran cantidad

<https://aristeginoticias.com/2202/mexico/mexico-cerro-2020-con-326-mil-muertes-en-exceso/>

de farmacias sólo para constatar el desabasto o encarecimiento de medicamentos, escasez que también se verifica en las estanterías de las farmacias de hospitales públicos. Otro problema igualmente dramático es la formación de un mercado negro de oxígeno —altamente demandado porque el coronavirus afecta, de manera preferente el sistema respiratorio y vulnera la capacidad de oxigenación del organismo— donde los desenlaces fatales son habituales debido a la falta y mala calidad del oxígeno medicinal.

La declaratoria de la emergencia sanitaria y la estrategia epidemiológica se tradujo en la cancelación de los servicios de atención primaria —consulta general y atención médica preventiva— en cuando menos 75%, también disminuyeron las intervenciones quirúrgicas en 70%. Estas condiciones impactaron negativamente en la atención de pacientes con enfermedades comunes, enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas de tipo crónico-degenerativo. En consecuencia, se incrementó el rango de muertes en exceso.

Gestión metafísica

Ante la expansión de la pandemia, la gestión del gobierno mexicano ha ido zigzagueando sin resultados plausibles: luego de decretarse y minimizar sus efectos, se implementaron diversas medidas, como el Modelo Centinela, la Jornada Nacional de Sana Distancia, la campaña Quédate en Casa, el semáforo epidemiológico, la reconversión hospitalaria, la compra de vacunas, la campaña de vacunación y las conferencias vespertinas. Varias de estas medidas emulan las recomendaciones internacionales; sin embargo se omiten otras, que pudieron ser cruciales para una mejor estrategia de prevención y contención, tales como la aplicación de pruebas, la detección de redes de contagio, el control de acceso a viajeros, el uso de cubrebocas, entre otras medidas. El gobierno mexicano ha sido renuente a seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de realizar pruebas para la detección oportuna de contagios y darles seguimiento: México está a la zaga entre los miembros de la OCDE por aplicación de pruebas (0.6 por cada mil habitantes), cuando Islandia encabeza la lista con 147.6 y el promedio entre los 37 miembros del organismo es de 27.7;¹⁴ en tanto que en una muestra a escala mundial ocupa el lugar 157 por el número de pruebas.¹⁵

La tozudez del presidente López Obrador al negarse públicamente a usar cubrebocas y a cancelar los actos públicos, los mítines y las conferencias matutinas, ha sido un caldo de cultivo para el contagio entre los nuevos potentados y sus seguidores. Tan sólo en

Palacio Nacional, la residencia oficial, empleados administrativos y funcionarios se han contagiado. No deja de ser sintomático el hecho de que tres potentados de la clase política mexicana se hayan enfermado de covid-19: el presidente de la República, el magnate Carlos Slim y el arzobispo Norberto Rivera; al igual que Hugo López Gatell, el responsable de la gestión de la pandemia, y una gran cantidad de funcionarios y políticos afines a la 4T, entre los cuales ya hay varios decesos. Pero más apremiante es que la mayor parte de los contagiados y víctimas fatales está radicada entre las clases populares, que no tienen acceso preferente a servicios hospitalarios de calidad, tratamientos efectivos, equipamiento y medicamentos, y en muchos casos la convalecencia y los decesos ocurren en condiciones lamentables, en sus propias casas, en la vía pública o en centros hospitalarios hacinados.

La renuencia presidencial de cubrirse la boca en los mítines y las reuniones con colaboradores e invitados se usa como un símbolo político ajeno a cualquier recomendación científica.¹⁶ Con ello se une al coro de presidentes negacionistas y negligentes de talante populista que minimizan la pandemia, inclusive que adoptan posturas pre-científicas o anticientíficas, como lo han sido Donald Trump de Estados Unidos, Jair Bolsonaro de Brasil y Boris Johnson de Gran Bretaña, entre otros. Pareciera que López Obrador confunde el uso de cubrebocas como instrumento de prevención sanitario con el acto de acallar su arenga política de todos los días y cotravie la gestión de la pandemia basada en prescripciones internacionales de expertos epidemiólogos como si fuese un acto en contra de la libertad.

Una interpretación política al respecto es que se trata de una postura populista, donde los expertos y científicos son personas adscritas a la élite y el pueblo no tiene porqué seguir las indicaciones emanadas del conocimiento científico y de los expertos sino la de sus propios instintos y emociones, porque en ellos reside una sabiduría y una bondad, pero

¹⁴ OCDE, «Testing for Covid-19: A way to lift confinement restrictions», OCDE, 2020, en https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129658-162d71r66u&title=Testing-for-Covid-19-A-way-to-lift-confinement-restrictions

¹⁵ Centro de Integración Ciudadana (CIC), «Coronavirus México. En conclusión: necesitamos más pruebas», 2020, en <https://cic.mx/datos/coronavirus-mexico-conclusion-mas-pruebas/>

¹⁶ Arturo Rodríguez, «Palacio Nacional, una fuente de contagio del coronavirus», *Proceso*, 31 de enero de 2021, en <https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/1/31/palacio-nacional-una-fuente-de-contagio-del-coronavirus-257345.html>

sobre todo conviene seguir las ordenanzas de su líder carismático, que interpreta las intuiciones y deseos del pueblo. Cuando en la antesala de la segunda fase de la pandemia muestra con sorna los amuletos religiosos que guarda en su cartera y expresa: «¡Detente enemigo que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo!», el presidente admite que son sus «guardaespaldas» y que el pueblo los usa como supuesta medida efectiva para contener el avance del coronavirus.¹⁷ Tamaña escenificación es propia del pensamiento mágico-religioso, pero viniendo de un jefe de Estado, que debería estar científicamente informado, representa un acto de irresponsabilidad política ante el desbordamiento de la crisis humanitaria.

Los puntos problemáticos en la gestión de la pandemia se ubican en las etapas sucesivas de la prevención, la gestión y la atención a los afectados por la crisis pandémica. En la etapa preventiva no se han aplicado suficientes pruebas para detectar los contagios y no se ha dado seguimiento a los enfermos y sus cadenas de contagio; tampoco se han realizado cierres de frontera y dentro del país para fines preventivos; la política sobre el uso de cubrebocas y la sana distancia ha sido confusa, desde la renuncia del presidente y el encargado de la política sanitaria, hasta los discursos y las conferencias con mensajes ambiguos y contradictorios que dejan perpleja a la audiencia. En la gestión de la pandemia se han enfocado las acciones a atender la contingencia sanitaria, pero no a mejorar el sistema de salud pública que debería de ser el foco de atención para construir desde la base una nueva, moderna y eficaz institucionalidad sanitaria, donde no tiene cabida la cicatería ni el dispendio ni la corrupción. El manejo político de la situación y los intereses económicos en juego han desvirtuado instrumentos como el semáforo epidemiológico: lo mismo se retrasa el señalamiento restrictivo en rojo que anticipa la apertura al naranja o amarillo, y en algunos casos los gobiernos, sobre todo el de la

¹⁷ Alberto Morales y Pedro Villa, «Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo: AMLO», *El Universal*, 19 de marzo de 2020, en <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/detente-enemigo-que-el-corazon-de-jesus-esta-conmigo-amlo>



Ciudad de México, juega con toda la paleta de colores para ir postergando las declaratorias de emergencia. En el tratamiento de los efectos socioeconómicos de la pandemia el gobierno ha sido omiso en brindar apoyos a los desempleados, a los microempresarios o pequeños productores, a los estudiantes con problemas de conectividad, a los enfermos desatendidos, etcétera; sólo se mantienen los programas asistenciales que simbolizan la figura presidencial y el programa de vacunación se supedita al cálculo político-electoral.

Infodemia gubernamental

En tiempos de la llamada posverdad, uno de los fenómenos paralelos desencadenados por la pandemia es la llamada *infodemia*, es decir, la sobreabundancia de información, gran parte de la cual puede ser falsa, distorsionada o distractora, que enturbia el panorama y nubla el entendimiento sobre la gravedad de la problemática y difunde datos erráticos. Esta propagación ha sido atribuida a las llamadas redes digitales y en menor medida a los medios de comunicación convencionales. Pero también los gobiernos han contribuido a la desinformación, confusión,

El rosario de declaraciones desafortunadas es inagotable, dada la persistencia en hacer declaraciones diarias y de proteger, antes que el estado de salud pública, la popularidad del presidente, como si fuese infalible.

inclusivo a la negación de la realidad. Paradójicamente, la información oficial se sustenta en datos falsos o incompletos o sesgados con el objeto de mantener a buen resguardo la imagen del gobierno. Y en ese rubro el gobierno de México ha destacado.

El rosario de declaraciones desafortunadas es inagotable, dada la persistencia en hacer declaraciones diarias y de proteger, antes que el estado de salud pública, la popularidad del presidente, como si fuese infalible. Al respecto, se puede tomar una muestra mínima. El encargado gubernamental de la gestión de la pandemia, Hugo López Gatell, ha dicho frases como la siguiente: «La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio»,¹⁸ una expresión zalamera que confiere atributos superiores, metafísicos, a un individuo propenso a enfermarse y contagiar, como en efecto sucedió con el presidente, quien terminó por contraer el coronavirus. En un solo día, el 12 de marzo de 2020, el mismo funcionario dijo las siguientes cuatro perlas discursivas: «El covid-19 es como una influenza; 5% de los que enferman van a tener que recibir atención especializada, y una pequeña minoría va a morir»; «El personal de salud no necesita trajes de esos alarmistas, como equipo de protección»; «El personal de salud y la población en general, no necesita tener ningún cubrebocas»; y «No se pretende restringir viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras». Pero la realidad se hizo notar para hacer un mentís a las desafortunadas declaraciones. Sobre la primera, las previsiones fueron rebasadas por los hechos y se registraron 2 millones 151 mil 298 contagios y 193 mil 142 decesos, amén de que están muriendo 8.97% de los mexicanos que se enferman; sobre la segunda, México reportaba oficialmente para el 18 de enero de 2021 2 mil 687 trabajadores de salud muertos por la pandemia y en ese rubro se sitúa en el segundo lugar en el mundo después de Estados Unidos; sobre la tercera, el no usar masivamente el cubrebocas es una de las causas del incremento de casos y decesos, al cierre de 2020 se reportaron 125 mil 807 muertes; en los primeros 70 días de 2020 van 67 mil 288; y sobre la cuarta, México es el único país del mundo que no exige usar cubrebocas y que no tiene vigilancia sanitaria en puertos, aeropuertos y fronteras, por lo que el paso libre significa, en este contexto, la posibilidad de libertad de contagio.

El presidente López Obrador, haciendo eco de su operador sanitario, o viceversa, ha mencionado en diversas ocasiones que no es necesario usar cubrebocas, que «hay que abrazarse, no pasa nada», que «ya se aplanó la curva», que «vamos bien» y una innumerable caterva de despropósitos. Ese «vamos bien» no se refiere, evidentemente, al estado de la salud pública ni a la economía nacional, ni a la

calidad de vida de la mayoría de la población, sino al posicionamiento político del presidente mismo, quien se ensalza cotidianamente, haciendo gala del autoelogio y presumiendo reiteradamente sus niveles de popularidad captados en encuestas que apuntan un nivel de aprobación de más de 60%, amén de propalar que es el segundo mejor presidente del mundo.

En definitiva, la cuestión política oficial está centrada en el terreno de la construcción del relato y el dictado de la agenda pública de discusión, y no en el estudio, deliberación e implementación de políticas y estrategias para una genuina transformación social. De ahí la centralidad que se le confiere a la función ideológica de las largas y machaconas conferencias matutinas.

Barrera de contención: «como anillo al dedo»

Como era de esperarse, la campaña «Quédate en casa» y la cancelación de actividades «no esenciales», además de la promoción del trabajo en casa y la educación a distancia, se tradujeron en la desolación del espacio público, y ello derivó, paradójicamente, como efecto indirecto, en la contracción de las movilizaciones y protestas callejeras de diverso signo ideológico-político, que se estaban multiplicando y poniendo en jaque al gobierno federal, desde los afectados por los despojos en las obras de infraestructura, pasando por los movimientos sociales, entre los cuales destacaban las feministas, las víctimas de la violencia, hasta grupos derechistas de talante golpista o provocador. Entonces, la pandemia, según el presidente, «nos cayó como anillo al dedo», para distender la animosidad política y continuar en solitario empujando su proyecto denominado «cuarta transformación» sin oponentes a la vista. En el vacío social y el desierto político sólo habita un personaje que se adueña del escenario.

No obstante, el ciclo de protestas se retoma paulatinamente, luego de un año de la pandemia y a partir de la celebración del día internacional de la mujer, en conjunción con las protestas por el intento de imposición de Félix Salgado Macedonio, como candidato al gobierno de Guerrero por Morena,

¹⁸ Hugo López Gatell, «Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina», Gobierno de México, 16 de marzo de 2020, en <https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-lunes-16-de-marzo-de-2020>

acusado de violaciones y acoso sexual. Debido a la precaria operación política más allá de la verborragia mañanera, el presidente erigió una valla perimetral resguardada por policías y militares en torno al Palacio Nacional, donde reside, para impedir el paso a las manifestantes feministas. En lugar de estudiar y atender las demandas feministas, las confronta desde el desconocimiento y el conservadurismo cuando dice que responden a intereses de los conservadores y que replican ideas «importadas», como la de «¡Rompe el pacto patriarcal!» y otras que supone afines al neoliberalismo.

Un gobierno que vive en campaña político-electoral permanente, se ubica en una coyuntura peliaguda por la controvertida gestión de la crisis pandémica y sus desastrosas consecuencias, sobre todo cuando sale a colación el abultado número de muertos y se corrobora el nefando diagnóstico sobre el deterioro del sistema de salud pública ya en tiempos de la 4T. Por si fuera poco, esta gestión se coloca en un momento de pertinaz confrontación entre el gobierno y sus adversarios, en las proximidades de una nueva contienda electoral, que habrán de celebrarse en junio de 2021 y resaltan por ser «las más grandes de la historia de México», al empatarse el calendario de las elecciones federales y locales, toda vez que se repartirán 21 mil cargos públicos, en todos los niveles, salvo el de la propia presidencia, que está a buen resguardo. La disputa no sólo es por presidencias municipales y gubernaturas, sino sobre todo por el control de la mayoría del Congreso, donde se decide el presupuesto y las reformas legales y constitucionales. En ello está cifrada la continuidad del proyecto lopezobradorista, empeñado en mantener sus proyectos de infraestructura, los programas de asistencia, la militarización y la austeridad presupuestal con sus recortes multisectoriales.

Interludio: el influjo de las *Big tech*

La pandemia de covid-19 irrumpe en un escenario mundial de crisis, como secuela de la crisis mundial de 2007-2008, y en un contexto donde las grandes potencias están enfrascadas en una sorda guerra comercial, los capitales entregados a sus estrategias de especulación y los políticos enarbolan

ideologías populistas, nacionalistas y protofascistas. El decreto de la pandemia como un problema global reorienta las conflagraciones hacia una peculiar carrera por las vacunas como supuesto salvamento de la humanidad y del propio capitalismo.

Uno de los efectos más conspicuos de la crisis pandémica mundial y la reestructuración económica es la concentración de capital entre grandes corporaciones globales que ampliaron su cobertura operativa, aprovecharon o gestionaron las plataformas electrónicas, mejoraron sustancialmente su posición accionaria en las bolsas de valores, accedieron a ganancias extraordinarias y lograron absorber o a desplazar a sus competidores. Es decir, el capitalismo afectado por la pandemia se curó en salud.

Bajo ese tránsito, de inmediato las grandes empresas de las tecnologías de la comunicación (*big tech*) se colocan como el sector del capital global ganador en los tiempos de la pandemia. Al respecto, se puede tomar nota del incremento notable en el valor de las acciones de estas corporaciones de vanguardia tecnológica. Muestra de ello es el índice bursátil estadounidense Standard & Poor's 500. En ese índice cotizan las grandes corporaciones digitales: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (GAFAM). No obstante, atrás de los indicadores bursátiles están las ganancias empresariales, que encuentran en la pandemia una fuente inagotable de ganancias, como lo muestra el desempeño de las firmas que están unidas en el acrónimo GAFAM, o en su versión más extendida, FAANGM (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y Microsoft). Aunque las ganancias empresariales de las *big tech* contrastan con los números rojos de la industria petrolera, que más que ganancias, reporta pérdidas relativas. Por lo pronto, las grandes corporaciones petroleras resultan ser las grandes perdedoras durante la pandemia.

Esto es consustancial al desarrollo del capitalismo: las grandes crisis son tiempos de canallas, por una parte mueren empresas y por otra se concentra el poder y las ganancias de los grandes capitales que sobrevuelan los aires con miras en el futuro inmediato, para dominarlo.

Carrera por las vacunas

A nivel mundial, las vacunas producidas para detener la pandemia de covid-19 han sido motivo de una gran especulación financiera y comercial. Con el ascenso de la mortandad, las grandes farmacéuticas han logrado incrementar su valor accionario en los grandes mercados bursátiles, y al efecto se han agenciado contratos multimillonarios con los gobiernos para vender sus biológicos aún sin estar aprobados por completo, toda vez que su comercialización se realiza prematuramente, con la autorización de vacuna de emergencia.

Dado que el sistema mundial capitalista transita por una suerte de «segunda guerra fría», como correlato de la disputa por la hegemonía

mundial, a trasmano de la carrera por las vacunas subyace una guerra comercial entre las farmacéuticas, no sin una andanada ideológica. Pese a que las pruebas y las autorizaciones finales de las vacunas no se han consumado, hay una campaña mediática para exaltar a las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, representantes del capitalismo estadounidense y británico, y una andanada en contra de las vacunas rusa y china, Sputnik V y Sinovac, respectivamente. Además de que nada se dice, por ejemplo, de los esfuerzos en Cuba por generar una propia, sin advertir tampoco que la isla está impedida para importar vacunas de Estados Unidos por el bloque comercial impuesto.

Habitualmente, el desarrollo de una vacuna segura y efectiva tarda un periodo de 10 a 12 años. Se requiere pasar por una fase de pruebas clínicas y superar la aprobación, además de preparar la producción masiva y su distribución comercial, es decir, las fases de desarrollo van de la preclínica, las fases 1, 2 y 3, la aprobación y la fase 4 de monitoreo a los pacientes vacunados. Pero dada la emergencia mundial y el interés de vender masivamente, las vacunas se están comercializando en su etapa previa, tan pronto como los organismos evaluadores autorizan su uso como vacuna de emergencia, todavía a prueba, pero con millones y millones de receptores. No deja de ser también esclarecedor que los organismos evaluadores de mayor influencia estén en los países centrales, Estados Unidos (la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos [FDA, por sus siglas en inglés]) y Gran Bretaña. Tan pronto como estos organismos autorizan las vacunas, comenzando con las que producen sus laboratorios con base en su propio país, la mayoría de los países aprueba, automáticamente, su uso en su propio territorio.

En la competencia por la venta de vacunas se están desarrollando hasta 12 tipos diferentes de vacunas. En pos de ello están los laboratorios Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna (estadounidenses); AstraZeneca (británico); Sinopharm y CanSino (chinos), BioNTech (alemán), Gamaleya (ruso), entre otros.

Como parte de la carrera por las vacunas y de la especulación que ello concita, también se registra el acaparamiento y comercialización de insumos, equipo médico, medicamentos, tales como los cubrebocas, los ventiladores, el oxígeno, etcétera. Asimismo, se reproduce la venta ilegal de vacunas mediante la cibercriminalidad.

Los fundadores de BioNTech están siendo considerados los superhéroes de la ciencia y son candidatos a recibir el premio Nobel, gracias a su vacuna contra la covid-19; no obstante, su laboratorio desarrolló la vacuna tras comprar patentes de ARN a un tercero, Katalin Karikó y Drew Weissman. Moderna hizo algo similar, con la ventaja de que su vacuna no requiere ultracongelación.

En la intrincada geografía mundial se pueden destacar tres grandes grupos de naciones: a) países con política de investigación y desarrollo (I+D) en materia de vacunas: Estados Unidos, Gran Bretaña, China,

Rusia, Cuba y otros; b) países sin I+D en vacunas pero con convenios de producción con grandes laboratorios: India, Brasil y Argentina; y c) los países que simplemente son compradores, pero con disímiles grados de desarrollo y solvencia económica: Canadá, Israel, México y el resto del mundo.

Dependencia tecnológica

México se coloca como el segundo mayor comprador de vacunas en América Latina, después de Brasil, con 178 millones de dosis a AstraZeneca, Pfizer, CanSino y Gamaleya.¹⁹

Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en México se estaría desarrollando una vacuna, que se llamaría «Patria», a petición del presidente; sin embargo, la dicha vacuna en realidad se ha desarrollado en Estados Unidos bajo la denominación NDV-HXP-S, a partir de una combinación del virus Newcastle y la espiga HexaPro, y sus fases de prueba se realizan en diversos países,²⁰ los gobiernos de los cuales, al parecer, se atribuyen igualmente la paternidad del biológico: en Brasil se llama ButanVac; en México, Patria; en Vietnam, Covivac; y en Tailandia no se ha enunciado un nombre. En México, Laboratorio Avi-Mex, una empresa farmacéutica veterinaria, sería la contraparte de Mount Sinai, el laboratorio estadounidense desarrollador de la vacuna, para realizar los ensayos de la fase 1.²¹ Por lo visto, se trata de una vacuna extranjera, que se fabricará y probará en el país y en otros más. La denominación nacionalista al biológico es un envoltorio ideológico.

En un desliz declarativo, se dijo que «el costo aproximado de la dosis mexicana es hasta 855% menor que el fármaco más caro en el mercado actual»,²²

¹⁹ Duke Global Health Innovation Center, 4 de diciembre de 2020.

²⁰ Carl Zimmer, «Una vacuna de bajo costo contra la Covid-19 está en marcha», *The New York Times*, 7 de abril de 2021, en <https://www.nytimes.com/es/2021/04/07/espanol/vacuna-hexapro-bajo-costo.html>

²¹ Mount Sinai Health System, «Mount Sinai develops a safe, low-cost covid-19 vaccine that could help low- and middle-income countries», *Coronavirus New Source*, 8 de marzo de 2021, en <https://www.newswise.com/coronavirus/mount-sinai-develops-a-safe-low-cost-Covid-19-vaccine-that-could-help-low-and-middle-income-countries>

²² *Aristegui Noticias*, «Arranca fase 1 de la vacuna «Patria»; prevén que la dosis mexicana esté lista para finales de año», 13 de abril de 2021, en <https://aristeguinoticias.com/1304/mexico/arranca-fase-1-de-la-vacuna-patria-preven-que-la-dosis-mexicana-este-lista-para-finales-de-ano/>

por lo que, de manera ilógica tendría un precio negativo. Quizá, lo que se quiso decir es que sería 85% más barata. No obstante, llama la atención que varias universidades públicas y un tecnológico privado en México (Universidad Autónoma de Querétaro [UAQ], Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], Instituto Politécnico Nacional [IPN] y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [ITESM]) tienen proyectos de desarrollo de vacunas, pero el gobierno no apoya estas iniciativas, prefiere importar tecnología y apropiarse de ella, como si fuera un producto gubernamental.

Los entresijos de la carrera por las vacunas, la incapacidad para producir vacunas en el país, la insuficiente adquisición de vacunas y el letargo de la campaña de vacunación son síntomas de la crónica dependencia científico-tecnológica, que deberían de ser contrarrestados si acaso interesara una transformación de la vida nacional.

Vacunación en México

En el concierto latinoamericano, México comenzó primero la campaña de vacunación contra la covid-19 a principios de 2021, sin embargo en el siguiente trimestre se rezagó hasta la octava posición regional, superado por Chile, Brasil, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Argentina y Uruguay,²³ países grandes y chicos, urbanos y rurales, más desarrollados y menos desarrollados. En ese momento, en México sólo se había vacunado a 2.2% de la población, cuando en Chile se había inoculado a 25.8%.

No obstante, en algunos países que ya han avanzado en el proceso de vacunación, se ha demostrado que la pandemia no cesa, y aún se precisan las medidas básicas de contención, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento y el lavado de manos, entre otras. Inclusive, la pandemia ya va en su tercera ola, sin tomar en consideración el hallazgo de nuevas mutaciones más contagiosas, no ofrece la certeza de que la vacunación resulte completamente efectiva para la inmunización generalizada y que proteja ante posibles nuevas cepas del SARS-CoV-2.

²³ Our World in Data, «Covid-19 vaccine doses administered per 100 people», 9 de marzo de 2020.

Parafernalia de las vacunas

En un episodio más de la tragicomedia política mexicana, el aparato gubernamental le confirió una recepción de Estado a una caja de vacunas recibida en el aeropuerto y el canciller Marcelo Ebrard osó decir que con esto sellaba los esfuerzos del gobierno en materia de vacunación, con la frase laudatoria y prematura: «misión cumplida».

Como en muchas actividades, el gobierno ha reservado la información sobre la compra de vacunas, específicamente los contratos con las farmacéuticas donde se estipula el costo, las cantidades, entre otros datos.

En el discurso oficial, la vacuna se propone como si fuera la solución mágica a la pandemia y a la crisis en su entorno. Más allá del hecho de que la capacidad de importación de vacunas es insuficiente y que apenas se ha vacunado a 0.5% de la población en México, y sólo a los mayores de 60 años, la vacuna no es garantía de contención de la pandemia, sino que se requeriría que al menos 70% de la población sea vacunada, y que no se esparzan nuevas cepas de virus.

Resulta llamativo que no se utilice la infraestructura del sector salud del país integrada por hospitales, centros de salud y dispensarios médicos en el programa de vacunación sino que en su lugar se recurra a las brigadas de los «servidores de la nación», acompañados de la policía militarizada y personal médico, que fungen como una estructura paralela a la institucionalidad sanitaria y responden a la red de gestión político-electoral del gobierno y su partido.

No deja de ser conspicuo el hecho de que las brigadas de salud que han comenzado a aplicar la vacuna no estén integradas sólo por personal médico, como era habitual en las campañas nacionales de vacunación. La campaña de vacunación denominada «Correcaminos» se organiza como una campaña político electoral mediante 10 mil brigadas integradas,²⁴ cada una de ellas, por 12 integrantes, de los cuales cuatro son «servidores de la nación», quienes elaboran padrones y distribuyen las ayudas del gobierno de los programas asistencialistas, como la «pensión» a adultos mayores y Sembrando Vida; cuatro elementos de las Fuerzas Armadas que son el brazo operativo militar del régimen, y sólo dos trabajadores de la salud que aplicarán la vacuna, además se agregarán dos voluntarios, que no tienen un perfil profesional preciso ni una tarea particular.²⁵ Evidentemente,

²⁴ Las brigadas ha sido una estrategia de operación política del presidente, desde que organizó las Brigadas del Sol, para promover el voto a favor del PRD, del cual era dirigente. Ahora se usan como operadores políticos del gobierno mediante los llamados «servidores de la nación», que vinculados a los «superdelegados», visitan las casas, promueven al gobierno, elaboran padrones y promueven el voto. En la contingencia sanitaria se reconvierten para aprovechar la aplicación de la vacuna y promover al gobierno, que para efectos prácticos también se ha militarizado.

²⁵ Redacción, «Así serán las 10 mil brigadas de vacunación en México contra el Covid-19», *El Universal*, 5 de enero de 2021, en <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asi-seran-las-10-mil-brigadas-de-vacunacion-en-mexico-contra-Covid-19>

la campaña de vacunación está diseñada a expensas del sector salud y su experiencia en campañas nacionales de vacunación, para ser reconvertida en una campaña con talante electoral, como si el cálculo político fuese el de una vacuna, un voto.

La pandemia no reconocida: militarización y muertes violentas

Uno de los sellos distintivos de la 4T es la militarización. Se le han asignado nuevas tareas al Ejército y un presupuesto que nada tiene que ver con la austeridad, sino con la abundancia y el derroche, y con ello más poder. Pero los resultados siguen siendo igualmente fatales que los reportados en los sexenios anteriores.

Los dichos de los políticos profesionales no son moneda de valor imperecedero, y el actual presidente no es la excepción: «Si gano la presidencia sacaré al Ejército de las calles en seis meses».²⁶ Al contrario, en el gobierno de la 4T el sector militar ha crecido desmesuradamente: no sólo se ha modificado la ley a su favor, se ha creado la Guardia Nacional y se le ha incrementado exponencialmente el presupuesto, sino que además se le han conferido funciones extraordinarias como policía civil y se le han otorgado funciones como empresarios contratistas en la construcción de los bancos del Bienestar, el aeropuerto Felipe Ángeles y tramos del Tren Maya, como administradores de las aduanas, amén de que serán administradores y beneficiarios del aeropuerto y el tren. Para no dejar lugar a dudas, en un episodio diplomático bochornoso, que contraviene el supuesto combate a la corrupción, el general exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, acusado y detenido por el gobierno estadounidense, fue liberado y exonerado merced a la injerencia diplomática mexicana. El Ejército es ahora fuerza armada, policía civil, empresario, administrador y constructor, entre otras funciones.

El presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la 4T se ha incrementado 39%, cuando a otras dependencias gu-

bernamentales se les ha ordenado recortes de hasta 75%. La dependencia a cargo de las Fuerzas Armadas tiene un gasto asignado de 112 mil 557 millones de pesos para 2021, lo cual supera a un conjunto de ocho secretarías de Estado: Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Cultura (SC), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de la Función Pública (SFP) y Secretaría de Marina (Semar). La Sedena es de las cuatro dependencias con más recursos asignados en la 4T después de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 337 mmdp, la Secretaría del Bienestar (Bienestar) con 191 mmdp y la Secretaría de Salud (SS) con 145 mmdp. Los recursos de que disponen superan 16 veces los de los partidos políticos en año electoral.²⁷

Con todo, uno de los mayores fracasos de la 4T ha sido, precisamente, la «pacificación» del país. Persiste la disputa territorial de bandas criminales, los homicidios dolosos, la venta de drogas, la extorsión, la desaparición forzosa, el tráfico de personas, el robo, etcétera. Asimismo, se registran diversas masacres, como 19 cuerpos de migrantes calcinados en Tamaulipas, lo cual recuerda la masacre de San Fernando y la de Cadereyta.

Pese a la pandemia y la reclusión que la acompaña, los homicidios dolosos y feminicidios reportados en México para 2020 ascienden a 35 mil 484, prácticamente similar a 2019 (35 mil 616). Los feminicidios en 2020 fueron 969 y en 2019 fueron mil 6, las cifras más altas, al menos desde 2015, cuando comenzó a elaborarse este tipo de estadística. La oleada de muertes violentas no ha sido resuelta por la 4T, pese a que ha realizado diversos cambios legislativos, creado la Guardia Nacional y canalizado una gran cantidad del presupuesto a las Fuerzas Armadas. Pese a ser uno de los problemas que sería el foco de atención de la 4T, los primeros dos años de gobierno han sido igualmente fatídicos que los de su antecesor, Enrique Peña Nieto. En vez de abocarse a sus funciones sustantivas, están supliendo funciones civiles del gobierno, incrementando la burocracia y creando una red de intereses económicos y políticos.

Según un recuento de trabajos periodísticos, que sin embargo no registran todos los hechos violentos sucedidos en el país, durante 2020 en México se publicaron notas sobre 5 mil 380 «atrocidades» con 6 mil 365 víctimas, tales como hallazgo de fosas clandestinas, actos de tortura, descuartizamiento de cadáveres, masacres, calcinamientos, entre otros hechos violentos.²⁸

²⁶ Animal Político, ««Si gano la Presidencia sacaré al Ejército de las calles en seis meses»: AMLO», *Animal Político*, 16 de noviembre de 2011, en <https://www.animalpolitico.com/2011/11/explica-amlo-su-republica-amorosa/>

²⁷ Claudia Guerrero, «Rebasa Sedena gasto de 8 secretarías juntas», *Reforma*, 12 de enero de 2021.

²⁸ *Causa en Común*, «Galería del horror: Atrocidades registradas en medios periodísticos durante 2020», 2021, en http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2021/01/210106_Informe-anual-atrocidades-2020_VF_compressed-1.pdf

Desastre educativo

La «crisis de diseño» o las decisiones adoptadas por el gobierno para enfrentar la pandemia han propinado grandes daños en el ámbito educativo. El más evidente es el hecho de que en el ciclo escolar 2019-2020 una gran cantidad de estudiantes ha quedado fuera de la escuela por la pandemia o pobreza, que mezcladas ejercen un efecto sindémico en la escolaridad. De un total de 54.3 millones de estudiantes potenciales en México, al considerar la población compuesta entre niños, adolescentes y jóvenes, sólo 33.6 millones estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, es decir, sólo 62% de la población en edad escolar. Esto quiere decir que la deuda social del Estado mexicano en materia educativa afecta a 5.2 millones de personas de entre 3 y 29 años, por ser excluidas del sistema educativo en sus distintos niveles.²⁹

Por la pandemia, la educación adoptó la impartición de clases a distancia y para ello se requirió el uso de computadoras y teléfonos celulares inteligentes. En muchos hogares se realizó un gasto adicional para la adquisición de algunos de esos equipos, el pago del servicio de internet y la compra de mobiliario, como mesa, escritorio y silla. Las percepciones pueden ser variadas, puesto que en el ámbito familiar se puede considerar como plausible el hecho de que se resguarde a los niños en el hogar, pero también se generan presiones para los padres que trabajan, que no cuentan con apoyo para supervisar a los niños y que tienen que suplir las funciones de los profesores en casa para dar seguimiento a las clases y realizar las tareas. Con todo, se avecina una catástrofe educativa dado el fracaso pedagógico y educativo de esta modalidad. En el diagnóstico se detectan problemas como afectaciones psicológicas en los estudiantes, pérdidas de aprendizaje y abandono escolar.³⁰

²⁹ INEGI, *Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020*, 2020, en <https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/>

³⁰ UNESCO, «UNESCO revela una pérdida aproximada de 2/3 de un año escolar en todo el mundo debido a la Covid-19», 25 de enero de 2021, en <https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/unesco-revela-una-perdida-aproximada-de-23-de-un-año-escolar-en-todo-el-mundo-debido-la>

Por lo demás, continúa la crisis educativa a nivel superior, con la virtual bancarrota de al menos 11 universidades públicas estatales que no cuentan con presupuesto suficiente para consolidar sus tareas educativas, científicas y culturales. Asimismo, se generaliza la precarización de los docentes de la educación superior que en el país suman 400 mil docentes. Las condiciones de precarización laboral impuestas por el neoliberalismo y refrendadas por la política de austeridad actual mantienen un sector académico universitario sumamente desigual y segmentado, donde tan sólo 80 mil trabajadores docentes están protegidos por contratos de tiempo completo o equivalente, en tanto que 320 mil sólo tienen contratos a tiempo parcial «por hora o asignatura», es decir, 80% de la planta docente universitaria mexicana está inmersa en relaciones laborales precarias que reimplantan formas de trabajo a destajo en el ámbito educativo. Cuando la mayoría de los trabajadores académicos labora con bajos salarios y condiciones de trabajo muy deterioradas, los resultados educativos no serán muy halagüeños.

Durante la pandemia de covid-19 no sólo se ha ahondado la deuda social del Estado mexicano en materia de salud sino también de educación.

Una crisis de diseño

Decrecimiento

La gestión neoliberal no puede ser más vigente cuando aún en el año que registra la peor caída del PIB en décadas, en medio de una crisis multidimensional, sanitaria, económica y social, el gobierno mantuvo su obsesiva política de austeridad, cuyo ajuste en el gasto público mantuvo a buen resguardo el superávit primario en las finanzas públicas, uno de los dogmas neoliberales. Empero, con ese propósito se agotó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales (FEIP), que sería tanto como, en términos coloquiales, «romper el cochinito». Y la cicatería oficial cerró la puerta a la implementación de una política de estímulos contracíclicos para enfrentar la caída de la economía, el desempleo y la pobreza. En cambio, se mantuvo el caudal de recursos del erario para seguir financiando los programas y proyectos del gobierno que no tienen efectos de desarrollo social, pero sí de afianzamiento de la hegemonía morenista, que sólo está interesada en aceitar la maquinaria electoral y copar los puestos y cargos públicos, para reproducir y acrecentar sus ámbitos de poder e influencia.

En los dos primeros años de la gestión de la 4T, la economía mexicana ha registrado una acusada debacle económica. En 2019 había caído -0.1% y al siguiente año se desplomó -8.5%, la que sería la peor caída registrada desde los años 30 del siglo pasado, cuando tuvo lugar la crisis mundial derivada del *crack* de 1929. Este decrecimiento no es inducido sólo por la pandemia, ya venía registrándose con antelación, en la

primera fase del gobierno de la 4T, cuando se registró un crecimiento negativo y se avizoraba una tendencia hacia la recesión. En cambio, otros gobiernos que tuvieron un mejor manejo de la pandemia y de la economía no tuvieron crecimiento negativo, sino crecimiento positivo de 1 a 3%.

En el juego de declaraciones contradictorias en que se ha desenvuelto el gobierno mexicano, el presidente ha dicho, por ejemplo, que la pandemia «nos vino como anillo al dedo» y que pese a los estragos sociales y económicos «vamos bien», lo cual sin duda es una expresión autorreferencial y no un diagnóstico verídico de la realidad. Asimismo, el secretario de la SHCP, Arturo Herrera, adujo que la crisis es «una crisis económica por diseño»,³¹ porque se trata de una decisión consciente para evitar la propagación de la covid-19.

La realidad es que el gobierno mexicano no implementó ninguna medida contracíclica y lo que es peor mantuvo el superávit primario, uno de los mayores dogmas de la gestión neoliberal, mediante el cual se administra el gobierno como si fuera una empresa, y, lo que es peor, haciendo

caso omiso de la catástrofe humanitaria en materia de salud, empleo, ingreso, educación y alimentación, donde los más afectados son los más pobres y desocupados. No obstante, se mantuvo el flujo de recursos públicos para seguir financiando las obras insignia del gobierno (construcción de la refinería Dos Bocas, el tren turístico Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, además del pago por la cancelación del NAIM y el rescate de Pemex), además de los programas del bienestar (becas a aprendices y estudiantes, subvención a adultos mayores y sembradores de árboles).

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) se usó como arma ideológica para posicionar al nuevo gobierno frente a sus antecesores al subrayar que era una obra producto de la corrupción, pero la cancelación de una obra que tenía un avance de la tercera parte no sólo significó la destrucción del capital ya invertido, sino que significó desconocer múltiples contratos y afrontar a los tenedores de bonos, lo cual significó contraer una deuda a 19 años, con cargo al erario y a los pasajeros que deben pagar el impuesto denominado uso de aeropuerto (TUA), que suele destinarse a la modernización de los aeropuertos. Esta decisión también significó un punto de inflexión en el desplome de la inversión

La cancelación del NAIM, que tenía un avance de la tercera parte, no sólo significó la destrucción del capital ya invertido, sino también desconocer múltiples contratos y afrontar a los tenedores de bonos, lo que contrajo una deuda a 19 años, con cargo al erario y a los pasajeros que pagan un impuesto denominado uso de aeropuerto (TUA), que suele destinarse a la modernización de los aeropuertos.

³¹ EFE, «México enfrenta una crisis económica «por diseño»: secretario de Hacienda», Forbes, 6 de octubre de 2020, en <https://www.forbes.com.mx/mexico-enfrenta-una-crisis-economica-por-diseno-secretario-de-hacienda/>



y la caída generalizada de la economía, que se agudizó con la empecinada política de austeridad gubernamental y la inversión selectiva en el sureste mexicano y, por si fuera poco, se profundizó aún más con la pandemia y la política consustancial de paralización de actividades productivas.

Antes de la pandemia, la economía mexicana estaba atrapada en una trampa de bajo crecimiento, empleo precario y desempleo. Pero la 4T no elaboró ningún plan de reactivación que considerara el apuntalamiento de sectores productivos estratégicos, es decir, replantear la estructura productiva y levantar nuevos sectores productivos de alto valor agregado.

En vez de arribar a una tierra prometida, estamos transitando peligrosamente hacia una quinta «década perdida» en México, si se toma como referente la década de los ochenta, cuando comienza el ciclo neoliberal, aún inconcluso. El país sigue la ruta de un crecimiento cero o paupérrimo, en vez de alentar ciclos de acumulación provistos de mecanismos de distribución del ingreso con la participación de los trabajadores organizados para cubrir las necesidades apremiantes de una población sumamente desigual.

Concentración de capital: cierres, ajustes

La imposición gubernamental de restricciones a la actividad económica para contener la propagación de la pandemia cerró la principal fuente de ingresos proveniente del consumo físico de las personas, sobre todo de pequeños negocios y empresas de servicios. Muchas tuvieron que cerrar definitivamente. En cambio, se abrió un amplio margen de operación para empresas de servicios, distribución y logística que operan con plataformas digitales, cuyo contacto con el cliente es mediante aplicaciones digitales.

Durante el prolongado periodo de la pandemia, se propagó una oleada de cierres de empresas y despidos. En ese marco, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) implementó la política del «salario solidario» consistente en la disminución de los salarios, las prestaciones y las jornadas laborales.³²

³² Coparmex, «Salario solidario», 2020, en https://coparmex.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/CPXSALARIOSOLIDARIO_V4.pdf

Algunas empresas aprovecharon la emergencia sanitaria para hacer severos ajustes laborales, como Aeroméxico, que en un contexto de desplome de la actividad aeroportuaria amagó con cancelar los contratos colectivos de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), además de acogerse a la ley de quiebras de Estados Unidos, capítulo 11. También se pactaron acuerdos con dos sindicatos más, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aero-náutica, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIA) y el Sindicato Independencia. Luego de negociar un contrato crediticio y pactar la reestructuración de sus pasivos, negoció con los sindicatos la reestructuración de los contratos colectivos, que incluye una rebaja de salarios como condición impuesta de un agente financiero para reestructurar su deuda. En contraste, la línea aérea Interjet se declaró en bancarrota y afectó a más de 5 mil trabajadores, quienes estallaron la huelga luego de meses sin percibir salarios. El gobierno no intervino en ninguno de los dos casos.

En la esfera burocrática, el gobierno de la 4T pidió a los burócratas que donaran su salario y su aguinaldo. Al respecto, planteó la supresión de los aguinaldos de burócratas desde puestos de subdirección hasta la presidencia, además de que recortaría, una vez más, los salarios. Algunos gobernadores también implementaron medidas semejantes, como el panista de Guanajuato, quien anunció que renunciaría temporalmente a su salario y solicitó lo mismo a su gabinete. En tono similar se pronunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México y diputados de algunos estados. Supuestamente, estos recursos serían donados para la compra de equipo médico y la protección del personal de salud. Se trata de medidas más de corte simbólico o propagandístico que verdaderas políticas públicas para fortalecer el alicaído sector salud y afrontar los estragos de la pandemia.

El gobierno de la 4T, adicto a la austeridad neoliberal, que renombra como «republicana» o «franciscana», ha optado por despedir masivamente a trabajadores del sector público, sin mediar estudios técnicos o programas de gobierno que lo justifiquen, simplemente por decreto se indica la orden ejecutiva de despedir personal, disminuir salarios y prestaciones, recortar presupuesto y depurar áreas de trabajo. La consecuencia es la desvalorización del trabajo, la depuración de personal de carrera altamente calificado y la precarización de la función pública debido a los continuos recortes y subejercicios, además la exigencia de que al presidente se le debe «obediencia ciega». No hay una estadística confiable sobre el número de despidos de trabajadores del sector Público, pero si la consigna de que los servidores públicos deben tener «90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de experiencia».

Fuga de capitales

A contraflujo, se registró una fuga de capitales operada por inversionistas nacionales y extranjeros quienes en el primer año de la pandemia transfirieron 18 mil 758 millones de dólares al exterior, según la balanza de pagos del Banco de México (Banxico) al cuarto trimestre de 2020, lo cual representa un incremento de 44.7% respecto del año anterior y se inscribe en una tendencia sostenida de exportación de capitales en los últimos cinco años.

Con el arribo de la 4T, y las decisiones en materia económica, como la cancelación del NAIM y la cervecera Constellation Brands, hay un punto de quiebre en la gestión de determinados proyectos de inversión privada y en consecuencia una disputa abierta con el empresariado sobre los planes de inversión y los apoyos gubernamentales.

Debido a que la mayor parte de los contratos del gobierno con las empresas ha sido por adjudicación directa, las compras y ejecución de obras, se han realizado bajo el manto de la discrecionalidad; es así que mediante ese mecanismo se asignaron contratos por 189.5 mil millones de pesos (42% de las contrataciones públicas), y en el rubro de obra pública habría llegado a 73%, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en tanto que las licitaciones son restringidas a un número corto de invitados preseleccionados. Otras estimaciones aseguran que las licitaciones directas representaron 80.3% en 2020.

La expectativa es que los estragos económicos de la pandemia no se podrán superar inmediatamente sino, quizá, a partir de 2024, dependiendo del ritmo y cobertura de vacunación, de la reactivación de la actividad económica y de la política gubernamental para reactivar la economía.

Trabajadores y pobres

Ascenso de la población desocupada

La crisis de «diseño» generó un incremento de la sobrepoblación relativa, es decir, de los trabajadores desocupados sin ingresos y sin acceso a los servicios de salud. A pesar de ser un daño induci-

do por la pandemia y la política del gobierno, no se ofreció ningún apoyo a los afectados, los trabajadores pobres.

Las estimaciones sobre el número de desempleados en tiempos de la pandemia, como en otros temas, son motivo de disputa entre los datos recabados por las instituciones especializadas y los «otros datos» palaciegos. El manejo de los datos oficiales está supeditado a los intereses político-electorales del gobierno en turno. Por una parte, el gobierno toma un dato parcial para decir que sólo se han perdido 1 millón de empleos, pero el INEGI calcula que han sido, en la etapa más aguda, 12 millones. El presidente utiliza el dato del IMSS según el cual los derechohabientes que habían perdido su empleo no alcanzaban el millón para minimizar la afectación social; sin embargo, esa cifra resulta incompleta, puesto que apenas considera la variación de empleos formales registrados en el IMSS e Infonavit, que de ser 20.2 millones pasaron a 19.3 millones. En contraste, en la Encuesta Telefónica de Empleo y Ocupación, el INEGI registra 12 millones de trabajadores que dejaron de recibir su ingreso, cuando entre marzo y abril pasaron de 57.4 millones a 45.4 millones; y la diferencia arroja el dato de quienes perdieron su empleo, aunque no se sabe si de forma temporal o permanente, y tampoco se marca una diferencia entre trabajadores formales e informales.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del INEGI, el número de personas ocupadas pasó de 55.7 millones en el cuarto trimestre de 2019 a 53.3 millones en el cuarto trimestre de 2020. La crisis económica asociada a la pandemia arrojó un saldo de 2.4 millones de personas que perdieron su empleo en 2020. Se trata de una caída histórica, al menos desde 2005, cuando comenzaron a elaborarse estas estadísticas. Un punto de referencia inmediato es la crisis mundial de 2008, cuando en el país se perdieron 450 mil empleos. Las actividades económicas más afectadas por la pandemia y con mayor pérdida de empleos fueron los restaurantes y los servicios de alojamiento con 769 mil trabajadores que perdieron su empleo; en tanto que la industria manufacturera registró 464 mil empleos perdidos, los servicios diversos 488 mil 622 y el comercio 282 mil 995. En el sector formal se perdieron 684 mil empleos y en el informal un millón 669 mil empleos, es decir, el sector informal concentró 71% de la pérdida de empleos. Desde otra perspectiva, los micronegocios registraron la pérdida de 914 mil empleos, es decir, 39%, y los pequeños establecimientos, 417 mil empleos, esto es, 18%. En cambio, los sectores que no fueron afectados en términos laborales en esta coyuntura fueron el gubernamental (aun cuando ya había sido afectado por la oleada de despidos de la 4T, que sin embargo había sido resarcida, hasta cierto punto, con nuevas contrataciones de funcionarios afines) y los organismos internacionales que incrementaron 145 mil 941 los puestos laborales, en tanto que la industria de la construcción también registró un aumento de 46 mil 664 puestos.

Un efecto contraproducente del ascenso de la población desocupada es el consecuente descenso de la población ocupada con acceso a los servicios de salud, una prestación laboral que precisa una relación contractual vigente. En algunos sectores, los más afectados por la pandemia, la pérdida de este servicio fue muy elevada, como en el restaurantero y servicios de alojamiento, con una caída de 22.9%.

Según el INEGI, de los 12 millones de empleos perdidos, para el término de 2020 se habrían recuperado 9.5 millones de empleos. Sin embargo, los empleos recuperados son, en su mayoría, precarios, sobre todo en micronegocios y el sector terciario, que engloban al sector informal. Con todo, se calcula que 2.5 millones de personas que perdieron su empleo no lo han recuperado. Así, pues, creció el ejército de reserva laboral, ubicado en una multiplicidad de actividades laborales que el gobierno decretó como «no esenciales». Estos desocupados son personas que están disponibles para trabajar, pero que la contingencia sanitaria los convirtió en irrelevantes, prescindibles o desechables. El cierre de sus lugares de trabajo, sean negocios o empresas, significó no sólo su conversión en desempleados sino también un estrangulamiento de empresas, muchas de las cuales fenecieron irremediadamente.

Bajos salarios

Al amparo del esquema de apertura al exterior, México se ha convertido en un verdadero paraíso laboral para los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, que encuentran en la abundancia, desorganización y baratura de los trabajadores un factor para abatir sus costos de producción. En ese modelo de gestión del trabajo, la mayoría de los contratos colectivos de trabajo han funcionado como contratos de protección al capital privado con la aquiescencia de los sindicatos y sus líderes. En este largo periodo, la mayoría de la población, integrada por trabajadores de distintas categorías, el grueso vinculado a una relación salarial de dependencia en varias modalidades, ha padecido un declive salarial y en términos generales se ha precipitado a una condición lacerante de pobreza social, desempleo masivo, violencia acrecentada, corrupción e

impunidad; además de estar expuesta a la devastación de la naturaleza, la urbanización caótica, las intrigas políticas y la anomia social.

Derivada originalmente de las exigencias de los demócratas estadounidenses cuando se negoció el T-MEC, además de la democratización sindical, la política de incremento salarial acordada por la 4T y el sector patronal mexicano sólo ha propiciado el aumento del salario mínimo. De manera generalizada, el mercado laboral sigue deprimido en términos salariales y la pobreza de los trabajadores sigue siendo una constante, inclusive se ha profundizado: la llamada pobreza laboral aumentó a 40.7% en México en 2020, la cifra más alta desde 2017.³³ Ese indicador se refiere a los trabajadores que con su salario no pueden comprar la canasta alimentaria, es decir, estarían dentro de la superexplotación, toda vez que perciben una remuneración por debajo del valor de su fuerza de trabajo. El aumento de ese indicador se corrobora al contrastar el decremento del ingreso salarial de 2.5% con el aumento del precio de la canasta alimentaria de 6.1% para zonas urbanas y de 7.6% en zonas rurales, que superan con creces el nivel de la inflación anual de 3.5%. Los trabajadores mexicanos viven para trabajar y trabajan para sobrevivir. Apenas una pequeña porción tiene la capacidad de comprar bienes inmuebles (p.ej., una casa o terreno) y menos aún de ahorrar e invertir.

En los tiempos pandémicos, que son los de la 4T, el salario medio ha declinado y se ha precipitado la incorporación mayoritaria de los ocupados en los niveles de ingresos menores.³⁴ Al término de 2020, en México la mayoría de los trabajadores, 60.7%, entre formales e informales, gana dos salarios mínimos (246.44 pesos diarios), en tanto que 23.3% percibe apenas un salario mínimo (123.22 pesos).³⁵ Durante la gestión de la 4T se ha incrementado la proporción de trabajadores ubicados en estos rangos de ingresos, de dos y un salario mínimo o menos, lo cual significa la generalización del efecto pauperizador.³⁶ De persistir esta tendencia se corre el riesgo de que en una década cerca de la mitad de la fuerza laboral mexicana gane apenas un salario mínimo. Por lo pronto, con el salario mínimo mensual de 3 mil 696 pesos en enero de 2021, que incluye 20% del incremento acordado por el gobierno y los empresarios, una familia típica de tres o cuatro personas no alcanza a comprar una canasta básica estimada en 11 mil 411 pesos que incluye 121 productos básicos. En contraste, apenas 3% de la población puede tener un ingreso de entre 40 mil y 50 mil (2 mil y 2 mil 500 dólares), para adquirir lo básico y lo suplementario, ahorrar, invertir y disponer de tiempo libre.

³³ Coneval, *Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020*, 9 de febrero de 2021.

³⁴ En términos reales, los trabajadores mexicanos ganan entre 3 mil 969 y 7 mil 393 pesos mensuales (entre 187 y 370 dólares).

³⁵ INEGI, *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2020*.

³⁶ En 2020, el salario mínimo diario en el centro de México se fijó en 123.22 pesos al día (poco más de seis dólares), un salario que percibe casi una cuarta parte de los empleados formales en México.

Primero los pobres

El discurso de la 4T, sobrecargado de propaganda y buenas intenciones, se arguye que el Gobierno ofrece una atención prioritaria a los pobres del país, entre los cuales se cuentan los principales electores del presidente y las bases sociales de su gobierno. La política de asistencia es una reedición de los programas neoliberales de apoyo, adscritos a liberalismo social, en este caso los programas del Bienestar operan mediante las transferencias de dinero a los beneficiarios, a través de esquemas de bancarización operados por Banco Azteca (que amplifica un mercado potencial para la venta de sus electrodomésticos y cuentahabientes) y las Tarjetas del Bienestar. Estos programas son similares a los que implementaron los gobiernos neoliberales anteriores, con otras denominaciones (Pronasol, Progresá, Oportunidades y Prospera), con mayores o menores recursos, pero con el mismo cometido de crear una base social de apoyo electoral al gobierno en turno, pero sin implementar políticas efectivas para superar las condiciones de pobreza de millones de mexicanos, tales como la reforma agraria, cambios en el sistema de propiedad, crédito a la producción, capacitación para el trabajo, sino que se opera de la forma más elemental, otorgar dinero sin ninguna contraprestación, puesto que el cometido es afianzar la hegemonía política y modular el conflicto social, esto es, sólo administrando el problema y encausando a los beneficiarios hacia el apoyo electoral al propio régimen.

Al final de cuentas, las transferencias monetarias son dádivas gubernamentales, que no se canalizan a la formación de medios de producción colectivos en torno a actividades productivas estratégicas ni a la formación de medios de consumo colectivos en rubros cruciales como la formación educativa o la salud pública, sino al consumo inmediato de sectores empadronados por las brigadas presidenciales (los «servidores de la nación») que conjugan el proselitismo electoral y la promoción de la imagen presidencial. Estos programas son la base de sustentación de la nueva hegemonía política lopezobradorista, pero aún así la pandemia ha erosionado los magros apoyos gubernamentales ante una generalización de la pobreza, el desempleo y el subempleo.

De forma inaudita, el gobierno ha renunciado a ejercer su función de apoyar al cúmulo de trabajadores despedidos y a la gran cantidad de trabajadores cuyas jornadas y salarios fueron disminuidos, muchos de los cuales fueron gestionados por las empresas bajo la premisa del «salario solidario». Sin considerar además a las pequeñas empresas familiares en aprietos.

Bajo la égida de la 4T, México se está convirtiendo en un país contenedor de una mayor cantidad de pobres de los que ya existían en el pasado inmediato, cuando el modelo neoliberal operaba como una eficaz «fábrica de pobres». El fenómeno de la pobreza aumentó durante la pandemia: la pobreza extrema pasó de 7 a 13%; la pobreza moderada

de 35 a 38%; la vulnerabilidad por ingreso de 7 a 11%; y la vulnerabilidad por carencia disminuyó de 30 a 19%.

El organismo encargado de evaluar los impactos de la política gubernamental contra la pobreza en el país, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estima que entre 8.9 y 9.8 millones de personas se sumaron a la categoría de pobres ubicados debajo de la «línea de pobreza» por su nivel de ingresos, y entre 6.1 y 10.7 millones se ubican con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema.³⁷

Una mezcla de factores como la inacción del gobierno, los despidos y los efectos de la pandemia significan un retroceso de una década en la trayectoria de «combate a la pobreza», que según las mediciones oficiales había registrado avances relativos, al disminuir las «carencias sociales» hasta 2018. No obstante, según los evaluadores de la pobreza del Coneval, en tiempos de la 4T el país habría retrocedido cuando menos una década, puesto que, en apenas un año de pandemia, se regresó a los niveles de pobreza existentes 10 años atrás.³⁸

Apoyos gubernamentales

La clausura de actividades económicas «no esenciales» obedece a una determinación gubernamental, pero en contrapartida, el gobierno no asume ninguna responsabilidad para apoyar durante la contingencia el ingreso de los desempleados forzosos o de los empleados que sufrieron una sustancial reducción de sus salarios.

En un contexto donde han desaparecido empresas y fuentes de trabajo, sectores completos han sido obligados a parar por las políticas gubernamentales que han determinado cuáles son sectores esenciales y cuáles no esenciales. Una cantidad indeterminada de empresas de escala media y baja estaría condenada a la quiebra, sobre todo en sectores como el comercio, el turismo, el transporte, los espectáculos, entre otros.

³⁷ Coneval, *op. cit.*

³⁸ *Expansión Política*, «El Coneval estima hasta 9.8 millones de nuevos pobres en medio de la pandemia», 9 de febrero de 2021, en <https://politica.expansion.mx/mexico/2021/02/09/el-coneval-estima-hasta-9-8-millones-de-nuevos-pobres-en-medio-de-la-pandemia>

El gobierno renuncia a su función crucial en tiempos de crisis social aguda como proveedor de medios de consumo colectivo, por ejemplo, un salario básico de emergencia, un seguro de desempleo o un programa de apoyo al consumo familiar. Su flagrante omisión transmite la carga de la responsabilidad a los propios trabajadores, que han sido desempleados y no tienen ingresos por un largo periodo de tiempo, o conservando el empleo han disminuido sustancialmente sus percepciones. El gobierno se contenta con mantener sus programas de asistencia a sectores no laborales, como las becas a estudiantes o a adultos mayores, donde quiere consolidar sus bases de apoyo electoral.

Los apoyos conferidos por el gobierno mexicano ante los estragos económicos y sociales ocasionados por la pandemia han sido de los más exigüos a nivel mundial, representan menos de 1% del PIB, muy lejos de 40% de Alemania, quien encabeza la lista mundial en apoyos fiscales, o de 15% de Brasil para América Latina y el Caribe.³⁹ Esta política es por demás conservadora: se antepone el dogma neoliberal del superávit fiscal a la imperiosa necesidad de expandir el gasto público y los apoyos fiscales, se sobrepone la supuesta salud de las finanzas públicas (no contratar más deuda, no subir impuestos, no expandir el gasto público) al apremio de garantizar la satisfacción de las necesidades sociales mediante la expansión del gasto público y los apoyos fiscales. Claramente, al Gobierno sólo le importan los proyectos insignia de la 4T: la militarización, el pago de la deuda de Pemex, los megaproyectos y los programas asistenciales. En ese marco, es previsible el deterioro de la economía, la caída de las ganancias empresariales, el desempleo, la caída de los salarios y el aumento de la pobreza.

En plena contingencia, y debido a la presión del gobierno estadounidense, se abrieron varios sectores productivos, especialmente las maquiladoras de la franja fronteriza vinculadas a los procesos de ensamble de la industria estadounidense, que operan al amparo del T-MEC. Este es un indicio de la

³⁹ IMF Fiscal Monitor, Moody's Investors Service. En una muestra de 84 países, Uganda y México se colocan en los últimos lugares por el apoyo del gobierno por estímulo fiscal (menos de 1% del PIB).

preponderancia de los intereses capitalistas transnacionales y de la indiferencia del Gobierno respecto de la crisis y sus estragos entre los trabajadores.

Muchos países recurrieron a la deuda para afrontar la coyuntura y el gobierno mexicano fue renuente a tomar una línea de crédito aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ese cometido, endeudarse, aunque en términos reales la deuda ha crecido por ajustes macroeconómicos, adquisición de deuda por cancelación de obras y el pago de la onerosa deuda de Pemex. Inclusive se negó la condonación de impuestos a las empresas y en medio de la pandemia el Sistema de Administración Tributario (SAT) estuvo presionando a los contribuyentes para que saldaran sus deudas con el fisco. Sin embargo, la deuda externa mexicana se ha incrementado, derivado de la devaluación de la moneda, el decrecimiento económico y la contratación de nueva deuda. En contraste, el gobierno sólo sostuvo el financiamiento a sus proyectos insignia y las transferencias monetarias a los programas de asistencia social, que tuvieron adelantos de cuatro meses (200 mil millones de pesos) debido a la inminencia de las campañas electorales, los cuales fueron operados a través de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios contratistas del gobierno en turno, quien se ha negado en toda la contingencia a cerrar operaciones de sus varios giros de negocio.

Remesas salariales al rescate

Entre tanto, se registró un aumento de las remesas de dinero enviadas por los migrantes a sus familias, las cuales son ingresos salariales que nada tienen que ver con programas de gobierno, pero éste los publicita como si fuesen parte de sus logros, y se repite la nomenclatura de los migrantes como «héroes», sin reparar en su condición de trabajadores migratorios, que por lo general laboran en condiciones sumamente precarias, mal pagadas e inseguras.

México figura como el tercer receptor de remesas en el mundo, después de China e India. En el país, las remesas salariales de los trabajadores migrantes son la principal fuente de divisas, y eso le confiere un rasgo estructural a la economía, que se especializa no en la exportación de bienes basada en trabajo inmediato o en trabajo general, sino directamente en la exportación de fuerza de trabajo de migrantes, cuya contraprestación son las remesas.⁴⁰ Según datos del Banxico, en 2020 México recibió 40 mil 606 millones de dólares (875 mil millones de pesos) por el dinero enviado por los trabajadores migrantes a sus familiares, el mayor monto en la historia, con un promedio mensual de 340 dólares y 1.8 millones de hogares receptores. Las entidades que más captaron remesas son Jalisco, Michoacán,

⁴⁰ Humberto Márquez Covarrubias, «México en vilo: desmantelamiento de la soberanía nacional y dependencia de las remesas», *Papeles de Población*, vol. 14, núm. 58., 2008.

Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Este flujo de divisas es una de las fuentes financieras más estables, inclusive que muestra una tendencia alcista, a pesar de la crisis mundial. Entre 2015 y 2020 la cantidad prácticamente se duplicó. La mayor parte de los envíos se está haciendo vía electrónica (alrededor de 95%) y cada vez menos mediante los giros postales o bancarios (*money orders*) o en efectivo. Este constituye un mercado muy apetecido por intermediarios no bancarios y bancarios que operan el envío de las remesas y que en promedio perciben comisiones de alrededor de 5% sobre el monto enviado. Del esquema operativo dominante vincula a Western Union en Estados Unidos con sus contrapartes Elektra, Coppel y BBVA en México. Con la implementación de la ley Fintech se pretende abrir el espectro de operadores mediante la integración de nuevas tecnologías.

En un contexto de austeridad presupuestal, el monto histórico de las remesas representa el presupuesto total asignado a cinco dependencias federales: la SS (encargada de gestionar la pandemia y aplicar las vacunas), Bienestar (encargada de otorgar dinero a los beneficiarios de los programas de asistencia social), STPS (encargada del programa de becas), SEP y SC. Las remesas superan, por ejemplo, 40 veces el programa estrella del gobierno denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, que es en realidad un subsidio a las empresas privadas que implementan programas de capacitación a jóvenes desempleados.

En un contexto donde la pandemia ha presionado hacia la disminución de las remesas, en México se observa el efecto contrario: el aumento de los envíos de dinero. Por lo que las remesas están subsidiando al gobierno, que se desentiende de su obligación de estimular la economía y apoyar a los trabajadores que han dejado de percibir ingresos. Esta función es realizada o suplementada por los trabajadores migrantes. Los dependientes económicos que perciben remesas podrán mantener su nivel de consumo a expensas de los apoyos gubernamentales.

Paradójicamente, el sostenimiento y ascenso del flujo de remesas fue necesario la activación del programa de apoyos fiscales en Estados Unidos —frente a su virtual inexistencia en México—, donde el gobierno otorgaba cheques para el consumo de las familias por montos de hasta 600 dólares a la semana que se distribuyeron a casi 7 millones de mexicanos en aquel país, de aproximadamente 12 millones de mexicanos,⁴¹ que no obstante perder el empleo, pudieron acceder a apoyos como el seguro de desempleo; aunado a que los envíos se hacen de manera electrónica, sobre todo mediante instituciones no bancarias, y que se ha restringido la entrega física de dinero por los propios migrantes a sus familiares en sus luga-

res de origen por las restricciones de viaje en esta contingencia.

Inopinadamente, la economía mexicana se beneficia de un ascenso histórico de remesas de migrantes, gran parte de los cuales ha estado desempleada durante la pandemia, pero que continuó teniendo ingresos por los apoyos gubernamentales en Estados Unidos, y de ahí deviene una parte significativa de las remesas. Los estímulos gubernamentales en México y Estados Unidos no tienen punto de comparación: en Estados Unidos se está destinando 13% del PIB y en México menos de 1%. Mientras en Estados Unidos se han aplicado 5 billos de dólares o 314 mil pesos por persona, en México la cantidad es exigua. Derivado de sus propias decisiones, así sean obligadas por la pandemia, al Gobierno mexicano se le puede atribuir una gravosa irresponsabilidad social en la gestión de la emergencia sanitaria y en la negativa a asumir las consecuencias sociales de sus erráticas determinaciones.

Al incremento en las remesas también contribuyen las condiciones macroeconómicas, en particular la depreciación del peso frente al dólar, que llegó a un nivel de 25 pesos por dólar. Además del diferencial salarial, que supone que un trabajador mexicano en Estados Unidos que realiza una actividad similar a otro que trabaja en México gana un salario mayor. Pese a que los apoyos del gobierno estadounidense están por terminar, se prevé un incremento del empleo, luego de la implementación de una campaña masiva de vacunación, que no tiene parangón en México, y a la aplicación del programa multimillonario estímulos que significará la reapertura de actividades económicas y sus fuentes de empleo concomitantes en Estados Unidos.

En 2019, la dependencia de las remesas fue de 3.8% respecto del PIB, el nivel más alto desde 2020. El incremento de las remesas frente al PIB también obedece a la contracción del PIB en México, de -8.5%. Las remesas en México, pero también en Centroamérica, han sido el recurso estratégico para sostener el consumo de familias golpeadas por la crisis.

So pretexto de las remesas, la 4T quiere modificar la ley del Banxico para obligar a que la institución compre el excedente de dólares que algunas

⁴¹ BBVA, Anuario de Migración y Remesas 2020.

entidades bancarias no puedan colocar en el mercado nacional o remitir a sus contrapartes en Estados Unidos, arguyendo que esta medida beneficiaría a los migrantes, cuando en realidad tiene un destinatario, Banco Azteca, que se queda con grandes cantidades de dólares en efectivo.

Conclusiones

Letargo oficial

México es uno de los países más lentos en recuperar el crecimiento, debido, por una parte, a las decisiones gubernamentales de corte restrictivo y, por otra parte, a la inacción o abandono del gobierno para subsanar las áreas afectadas por sus decisiones. El gobierno adoptó medidas tardías para la contención de la pandemia que afectaron a la economía y la sociedad, pero transfirió los efectos nocivos a las familias, trabajadores y empresarios, sin asumir su parte de responsabilidad.

El gobierno tiene la capacidad de ejercer un gasto de emergencia para la reposición de los medios de consumo de las clases trabajadoras afectadas por el desempleo o la pérdida de ingreso, así como el fortalecimiento inmediato del sector salud para atender la emergencia sanitaria pero también el cúmulo de enfermedades infecciosas y no infecciosas que carcomen la salud pública; a su vez, puede realizar un gasto estratégico para compensar el cierre forzoso de actividades declaradas por el propio gobierno como «no esenciales», que perdieron no sólo flujo de efectivo sino que no fueron perdonadas de sus obligaciones fiscales y continuaron haciendo frente a sus obligaciones financieras por deuda y pago de renta, y en algunos casos sosteniendo los salarios. En cambio, el gobierno sólo mantuvo sus intereses políticos mediante el interrumpido flujo de dinero a los proyectos insignia y a programas asistenciales con propósitos electorales.

Como punto de comparación se puede advertir cómo el recién estrenado presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un programa masivo de vacunación, que incluye la inoculación inme-

diata de 100 millones de personas en tan sólo 10 días. Además, entregará 100 millones de cheques por mil 400 dólares de ayuda en el mismo periodo. En México, el programa de vacunación no ha funcionado, por el momento, dada la escasez de dosis y tampoco se han distribuido apoyos. Por si fuera poco, en las primeras etapas de vacunación, una de las paradojas es que el gobierno que más mexicanos ha vacunado es el de Estados Unidos, tanto por los mexicanos que residen en aquel país como por quienes residen en México, pero hacen el viaje al vecino del norte para ser vacunados, toda vez que en su país se ha demorado mucho el proceso.

Al contrario de la norma cicatera de la austeridad, se requiere un mayor gasto social para estudiar la pandemia con pruebas, rastreos y medidas preventivas; reconstruir el sistema hospitalario, garantizar escrupulosamente el abasto de medicamentos y garantizar el acceso universal a las vacunas; configurar un ambicioso programa de I+D en salud pública y apoyar irrestrictamente a las universidades públicas y centros de investigación.

Gobierno fallido

Muchas han sido las promesas y exiguos los resultados: se ofreció hacer de México una potencia económica mundial, a semejanza de los países de Asia-Pacífico y convertir al país en un Estado social garante de derechos como Dinamarca. La realidad es que el país sigue sumido en el subdesarrollo y dista mucho de convertirse en un país desarrollado, a semejanza de los países escandinavos o los tigres asiáticos en materia sanitaria y económica, respectivamente, como ilusamente ha propalado la 4T.

En sus propios dichos, el líder de la 4T plantea que la «transformación» no sólo es el combate a la corrupción, objetivo reduccionista de por sí para un cambio social sustantivo, sino que también es un proceso emocional para amar al prójimo, tener fe y esperanza, en un mundo donde reine la fraternidad. Esa es la tónica indicada para un capitalismo con rostro humano, con aderezos moralistas y evangélicos.

El Estado mexicano, gestionado por la 4T, ha fallado en garantizar el derecho humano a la salud con la provisión de medicamentos, la infraestructura hospitalaria, los servicios médicos y los tratamientos indicados. Para cambiar esta situación, se requiere abandonar esa política de austeridad e invertir más en el sector salud, pero también invertir más en el trabajo científico y en áreas estratégicas de investigación y desarrollo, además de impulsar formas de trabajo colaborativo en los campos de la salud, la educación, la ciencia y la tecnología.

Debido al mal manejo de la pandemia, diversos países del mundo como Canadá, Estados Unidos, Cuba y España están aislando a México mediante cancelaciones o restricciones de vuelos al país.

Disputa por los datos, entre la popularidad y la vida

La disputa por los datos parece ser crucial, porque el indicador de muertes devela la efectividad o el fracaso del gobierno para atender la pandemia y ubicar dónde están sus prioridades, si la de preservar su popularidad y ganar elecciones o garantizar la vida de la población y mejorar la salud pública.

El Estado mexicano ha sido rebasado y ha mostrado una estrategia errática ante la oleada mórbida. México es uno de los países con la peor gestión del gobierno sobre la pandemia de covid-19. Entre 98 naciones fue el segundo peor calificado, con un índice de 6.5 sobre 100, sólo superado por Brasil, según el Instituto Lowy.⁴²

La 4T tiene como principal prioridad su proyecto político-electoral, y en ello va cifrada la popularidad del presidente. Antes que atender los problemas estructurales y encauzar un cambio social profundo, se antepone la vanagloria de contar con altos niveles de popularidad y proteger la sacrosanta «investidura presidencial».

La crisis pandémica no es una fatalidad, sino una crisis larvada

La pandemia no es un «desastre natural», sino una crisis del sistema de reproducción socioambiental basado en el capitalismo, pero se requiere una mejor gestión de la pandemia del gobierno, en todos sus niveles. Es una crisis inducida por el Estado y sus efectos son

⁴² Lowy Institute, «Covid Performance Index», 2021, en <https://interactives.lowyinstitute.org/features/Covid-performance/>

responsabilidad gubernamental, no de las familias y los individuos.

El peor de los costos humanos durante una crisis inducida, o de «diseño», como es la pandémica, es cuando se deja al garete a las víctimas, sean desempleados, pobres o desatendidos, y que se asuma, aun sin decirlo, «que mueran quienes tengan que morir». Una actitud políticamente cínica aflora cuando, por ejemplo, se dice que «vamos bien», en alusión a los intereses políticos de la cúpula estatal, mientras que los sectores populares, los trabajadores pobres, se están colapsando. 